



Taller sobre Seguridad Ciudadana en México

Organizado por el Woodrow Wilson Center, CAF y el Instituto Tecnológico de Monterrey

Monterrey, Nuevo León

Octubre 28, 2014

Resumen





como la utilización de coches bomba y granadas de fragmentación, secuestros masivos y bloqueos de la vía pública (“narco-bloqueos”); ejecuciones de policías y otros elementos encargados de la seguridad pública, etc. (Nava, 2011: 22).

Eventualmente, los Zetas dejan de ser el brazo armado del CDG y comienzan a operar de manera independiente. Finalmente, a principios de 2010 se da un rompimiento entre las dos organizaciones que desemboca en una violenta batalla, la cual afecta de forma contundente a la sociedad, la economía y la situación en general del estado. La violencia en Tamaulipas se dispara entonces de forma espectacular. Solo en el año 2010 se registraron 1,209 asesinatos vinculados al crimen organizado en la entidad según datos oficiales (Gobierno Federal, Oficina de la Presidencia, 2010), incluyendo el del candidato del PRI a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú.

También destaca el éxodo de más de 300 personas que huyeron de Ciudad Mier, desplazados por la violencia, y que se refugiaron en un albergue improvisado en la ciudad vecina de Miguel Alemán en noviembre de 2010. Dos ejemplos más de la situación de “terror” que se suscitó en el estado son el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando en agosto de 2010, y el hallazgo de cerca de 200 cuerpos enterrados en fosas (“narcofosas”) en la misma región en abril de 2011. Aunado a lo anterior, en los últimos años se han registrado secuestros de camiones de pasajeros en las carreteras del estado, ataques a cuarteles militares, “narco-bloqueos”, coches-bomba, granadas arrojadas contra oficinas de gobierno en diversos municipios, y la fuga de cientos de reos de penales en distintos municipios del estado (Correa-Cabrera, 2013).

Estos elevados niveles de violencia se dan en un contexto de corrupción de funcionarios gubernamentales a todos los niveles; extorsiones a negocios de todo tipo; el surgimiento de un nuevo mercado de estupefacientes en México en el cual se ofrecen todo tipo de drogas a precios más accesibles para los consumidores nacionales; y la utilización de prácticas



extrema, la impunidad y la falta de estado de derecho continúan caracterizando a Tamaulipas. Un claro ejemplo de esto es el asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, jefe de seguridad de la región norte de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, a principios de noviembre de 2014. Y también en fechas recientes, se registra un homicidio de cuatro jóvenes—tres de ellos de nacionalidad estadounidense—en la localidad de Control (que forma parte del municipio de Matamoros, Tamaulipas). En este último caso, se investiga la presunta participación de elementos del denominado “Grupo Hércules”, un equipo de seguridad al servicio del ayuntamiento de Matamoros, encabezado por Leticia Salazar Vázquez. Este grupo ha sido fuertemente cuestionado desde su creación por la falta de definición con respecto a su legalidad y al alcance de sus funciones.

En general, los crímenes de alto impacto en Tamaulipas se encuentran por encima del promedio nacional, particularmente en los municipios de Reynosa y Tampico en meses recientes (Wilson y Weigend, 2014). También en últimas fechas, Tamaulipas ha encabezado la incidencia nacional en cuanto al número de averiguaciones por armas ilegales y delincuencia organizada (Ángel, 2014). Es importante destacar que no obstante que la situación de inseguridad no ha mejorado visiblemente desde 2010—cuando el CDG y los Zetas entran en abierta confrontación—las dinámicas de la violencia en Tamaulipas sí se han modificado. Hoy en día, los principales hechos violentos tienen más que ver con conflictos al interior de las organizaciones delictivas mismas y con los enfrentamientos de estas con las fuerzas federales, que con luchas entre el CDG y los Zetas, las cuales caracterizaron el momento más extremo en lo que se llegó a denominar la “guerra por Tamaulipas”.

Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administración de justicia en todos los niveles, su muy limitado grado de organización comunitaria y la censura mediática casi absoluta en los espacios locales. Esto limita fuertemente la capacidad del estado para “resistir y responder tanto a las condiciones de crisis como a los retos de gobernabilidad subyacentes, desarrollo económico e inclusión social” (Wilson y Weigend, 2014: p. 21). Y si el estado está limitado para ejercer sus funciones efectivamente, la sociedad civil se encuentra aún más vulnerable y en condiciones mucho más desventajosas para participar en los distintos ámbitos de la vida pública—sobre todo en el terreno de la seguridad.

Seguridad Ciudadana en Tamaulipas

En resumen, el clima de extrema violencia en el noreste de México y especialmente en el estado de Tamaulipas ha planteado la necesidad de buscar soluciones de fondo. En principio se envía a las fuerzas federales—principalmente al ejército y a la Armada de México— a hacer labores de seguridad pública como medida de emergencia. Esta lógica de operación se refuerza con el diseño del Plan Tamaulipas en 2014 al no registrarse los resultados esperados. En Tamaulipas se habla poco de la seguridad ciudadana dadas estas condiciones en un entorno donde la seguridad pública y la delincuencia organizada se militarizan. La estrategia de seguridad continúa teniendo un componente castrense muy importante por el alto grado de peligrosidad de los grupos delincuentes que operan en el estado, cada vez

de forma más “desorganizada”, pero igualmente violenta. El papel de las fuerzas federales parece fragmentar a las dos organizaciones criminales más importantes en Tamaulipas, lo que desemboca en una situación de gran peligro para la sociedad.

En este contexto, la sociedad civil se encuentra extremadamente vulnerable y, por lo tanto, la seguridad ciudadana parece ser una propuesta inviable. En otros esquemas que registran



grupos de presión al visibilizar problemas que debieran ser considerados en las agendas políticas. Sin embargo, su participación en cuestiones de seguridad ha sido mínima y se han limitado a reforzar algunos valores, fortaleciendo así la cohesión social, lo cual podría representar una forma de intervención en la problemática social y por tanto tener un cierto impacto en la seguridad (Zamorano y Contreras, 2015). Por último, se han implementado, de forma aislada, políticas de prevención del delito con énfasis en la participación ciudadana en algunos municipios del estado, tales como los Programa Escuela Segura (PES) y los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) en Matamoros (López, 2015).

La implementación de estas políticas no ha arrojado resultados contundentes. De igual forma, la mayor generación de capital social, así como la creciente participación de las organizaciones de la sociedad civil en diversas áreas de la vida pública en Tamaulipas, han sido acciones insuficientes para fortalecer de manera contundente los mecanismos de participación ciudadana en la entidad. A esto ha contribuido también el hecho de que la participación electoral se concentró por mucho tiempo a favor de un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este contexto, la sociedad civil tamaulipeca es extremadamente débil—para algunos casi inexistente—lo cual se refleja en la falta de

Con la proliferación de blogs y plataformas de reportes de violencia en Tamaulipas viene también la censura en un clima de enfrentamientos violentos entre grupos criminales y de estos con las fuerzas federales. La participación de ciudadanos en medios no controlados por el gobierno incentiva la entrada posterior (o infiltración) de actores criminales y gubernamentales para cambiar percepciones, influir en opiniones, justificar acciones de política específicas y censurar por medio del miedo.

El primer intento de censura o silenciamiento a comunidades virtuales en Tamaulipas se da en Nuevo Laredo el 13 de septiembre de 2011 con la aparición de dos colgados, quienes



Las estrategias que tienen como componente central el involucramiento de la ciudadanía son muy importantes, sin embargo, no son “suficientes” en un entorno como el que se vive en la mayoría de los municipios de Tamaulipas. Este es el caso, por ejemplo, de “[1] a política de la prevención del delito con participación ciudadana [que] tiene múltiples puntos favorables para que, en el largo plazo, se restaure el tejido social” (López, 2015). Sin embargo, para que eso suceda, es importante que la política de seguridad pública—a nivel municipal, estatal y federal—se replantee, y se actúe de manera contundente, pues estamos hablando de grupos fuertemente armados que mantienen a la sociedad civil como rehén. El Estado en Tamaulipas debe primeramente recuperar el espacio perdido y retomar el monopolio del uso legítimo de la violencia. Es una obligación del Estado mexicano proteger a sus ciudadanos y asegurar la estabilidad en la totalidad del territorio nacional. Una vez establecidas las condiciones mínimas de seguridad, la sociedad civil podrá participar.

Las políticas de seguridad y prevención del delito con participación ciudadana han tomado especial relevancia en años recientes en América Latina. La lógica de implementación de dichas políticas se basa primordialmente en los valores que suelen caracterizar a la sociedad civil en situaciones normales derivados de la formación de capital social y logros de la misma en materia de transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior se recomienda en situaciones donde se registran elevados niveles de corrupción. Los logros de la ciudadanía en materia de seguridad pública y diseño de políticas efectivas de prevención del delito han resultado evidentes en diversos países y ciudades latinoamericanas (Base de Datos Políticos de las Américas, 2008). Destacan principalmente los casos de Bogotá y Medellín en Colombia, Río de Janeiro en Brasil y Costa Rica. Dichos esfuerzos han requerido de la cooperación internacional y el enfoque ha sido principalmente en las áreas de prevención del delito y fortalecimiento de las capacidades locales.

Sin embargo, es preciso destacar que el éxito de dichas políticas depende de diversos factores y sobretodo de la existencia de un Estado fuerte que controle el territorio a nivel nacional. El caso de Tamaulipas resulta por demás problemático y es para la sociedad civil un territorio inaccesible. En situaciones donde el crimen organizado domina una parte importante de las actividades económicas, políticas y sociales de una región o ciudad, aunado al hecho de la existencia de un poder paralelo al Estado visiblemente militarizado—con acceso a cuantiosos recursos y armas de alto calibre—la ciudadanía se encuentra fuertemente restringida en su actuar. Los dilemas que enfrenta la sociedad civil, así como los límites a la participación ciudadana en Tamaulipas podrían revertirse sólo hasta que el Estado recupere el control total del territorio y el monopolio del uso legítimo de la violencia.

